

Un Gobierno legal y legítimo

JOSEP-MARIA TERRICABRAS. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 22.11.06

CiU ganó las elecciones al Parlament. Esto lo acepta todo el mundo. Pero CiU no encontró a nadie que gobernara con ella y se ha llegado a una mayoría sin ella. Esto lo acepta todo el mundo menos CiU. Entiendo el disgusto y el berrinche, especialmente de quien piensa que es suficiente con ganar las elecciones. Este es precisamente el error: ganar las elecciones es magnífico, pero para formar gobierno hay que tener mayoría. Por eso se necesitan a menudo acuerdos y coaliciones. **Mas** ha ganado las elecciones, pero no el Govern. Lo uno no lleva automáticamente a lo otro, por mucha rabia que dé. Así es como funciona en todo el mundo, simplemente porque las coaliciones dependen de sumas y restas, es decir, de las matemáticas, y estas son iguales en todas partes.

Estos días **Mas** repite la estrategia que ya probó durante el episodio del 3%: entonces reconocía a **Maragall** como *president* de la Generalitat, pero no como *president* de Catalunya, porque, según él, no tenía "la autoridad moral". Ahora vuelve otra vez: reconoce que la Entesa es legal, pero afirma que no es legítima, de modo que el nuevo *president* no tendrá autoridad moral. Por el lado socialista se quiso hacer una distinción parecida cuando **Jordi Pujol** sacó un escaño más que **Maragall** y este obtuvo más votos: entonces también se quería distinguir entre la legalidad de **Pujol** y la legitimidad de **Maragall**. La distinción es, democráticamente, inaceptable. En una dictadura o después de elecciones dudosas --como podría ser el caso del México actual-- la distinción es correcta. En una democracia, no, porque el único criterio de legitimidad es la legalidad del proceso. En democracia, si algo es legal, ya es legítimo. Ello no significa que todo el mundo considere aquella decisión igualmente buena, por razones personales, religiosas o políticas. Pero son los votos del pueblo y las sumas y restas de estos votos los que dan a la vez legalidad y legitimidad. Lo que no puede ser es que el pueblo dé legalidad y que un partido o un líder distribuya legitimidades. No es la legalidad la que desacredita a la democracia, sino, al contrario, el intento de hacer creer que la ley es, democráticamente, secundaria.